

Conclusiones Informe Social Fundació Rafael Campalans

Eva Granados y Adrián Vidales

GRACIAS POR ESTOS DIEZ AÑOS DE REFLEXIÓN COLECTIVA

El Informe Social de la Fundació Rafael Campalans ha ido evolucionando con sus ediciones al paso de las circunstancias sociopolíticas y también, por qué no decirlo, de las personales de sus autores. Algunas personas están desde su primera edición y entran y salen del índice, pero se mantienen en el consejo de redacción. Otras se van sumando a la familia de esta pequeña compilación de fotos fijas socioeconómicas, análisis, ocupaciones y preocupaciones del devenir de nuestra sociedad. A todas las autoras y autores les agradecemos su trabajo y entrega.

Son ya diez años, desde el primer Informe Social que titulamos *Paro, pobreza y desigualdades sociales en Cataluña*. Desde la Fundació Rafael Campalans pensamos que era necesaria una aportación a la reflexión y propuesta sobre la situación socioeconómica. El *procés* independentista avanzaba y Artur Mas protagonizaba los mayores recortes a la vez que enardecía el nacionalismo a base de agravios y mentiras. Desde la Fundació decidimos poner rostro a los recortes, mostrar las consecuencias que estos tenían en el día a día de demasiadas personas y reflejar que el remedio estaba siendo mucho peor que la enfermedad. Al primer informe siguieron:

- *Desigualdades y exclusión social en Cataluña.*
- *Adversidad social y desigualdades: diagnóstico y alternativas.*
- *El escenario después de la crisis: viejas y nuevas desigualdades.*
- *Recuperación económica y debilidad social.*
- *Desigualdades ante un futuro incierto.*

Toda una década de reflexión y trabajo colectivo para demostrar que había otro camino. El último número, *Un nuevo contrato social para una prosperidad compartida*, fue un grito de esperanza cuando la pandemia ya remitía y el giro socialdemócrata de la Unión Europea era un hecho: SURE, fondos de recuperación, ERTE, suspensión de las reglas fiscales, etc. Diez años más tarde, y de la mano de los progresistas españoles, Europa mostraba que, efectivamente, había otro camino y que elegirlo era una cuestión de voluntad política.

EL ERROR HISTÓRICO DE LOS RECORTES

Una década es un buen momento para hacer balance. Hace diez años sufríamos las consecuencias de la gran crisis financiera y la errónea respuesta que se le dio. La Gran Recesión nos trajo una depresión profunda, pero lo que terminó por desplomar todos los indicadores sociales fue la política *austericida* con la que se pretendió responder al hundimiento económico y que terminó agravando sus consecuencias.

Europa consideró que las economías nacionales había que gestionarlas como las economías familiares, y tanto Artur Mas como Mariano Rajoy quisieron ser los alumnos aventajados de la clase. Sin empatía alguna, sin pensar en la mayoría social, se trató de cuadrar las cuentas a golpe de recorte mientras se aprobaban amnistías fiscales y de ganar competitividad a golpe de devaluación de las condiciones laborales. Se dio carpetazo al diálogo social, metiendo en un cajón todo posible acuerdo de sindicatos y patronales para perpetrar la contrarreforma laboral y de pensiones. Todo ello para ver cómo crecía el paro (con un desempleo juvenil en cifras escandalosas), aumentaba la precariedad y se devaluaban salarios. Fueron necesarios ocho años para recuperar el nivel de nuestro producto interior bruto y once para volver a ver los niveles de afiliación previos a la gran crisis. La foto del gran legado de la derecha se completó con un rescate bancario que se decidió sin siquiera debate público, sin que se exigieran responsabilidades a nadie y que todavía estamos pagando, a pesar de que "no costaría un céntimo al contribuyente español".

Diez años después, ya nadie en Europa discute que aquellas medidas fueron un tremendo error. Solo la derecha de nuestro país se aferra a una doctrina neoliberal más cercana al dogma que a la razón: no han aprendido nada de aquel desastre y siguen insistiendo en las mismas recetas que no solo no funcionan, sino que ya entonces castigaron al país. Y qué decir de Cataluña: se ha perdido una década en debates estériles, en división social e inacción política... si se pudiera contabilizar el coste de oportunidad que ha tenido para la sociedad catalana los gobiernos independentistas, muchos quedarían vacunados de las recetas nacionalistas para varias generaciones.

NUEVA CRISIS, DISTINTA RESPUESTA

En estos últimos tres años, Cataluña y el resto de España han atravesado una pandemia y ahora una guerra en la frontera de Europa, cada una con sus duros efectos económicos. Como antaño, también ahora vivimos una crisis surgida fuera de España, pero la diferencia está en cómo hemos afrontado esta crisis y cómo lo hizo el PP entonces. La prudencia es la mejor compañera en esta realidad compleja, en la que se están redefiniendo los equilibrios mundiales, abordamos una crisis energética y sufrimos una inflación que hace que a un tercio de los españoles les cueste acabar el mes. Pero, a pesar de todas esas incógnitas y dificultades, es de justicia situar dónde nos encontramos en estos momentos. El escudo social que el gobierno desplegó durante la pandemia se acordó con agentes sociales y económicos en un diálogo social permanente que hizo posible proteger a más de tres millones de trabajadores y trabajadoras con los ERTE, un millón de autónomos, se evitó el cierre de decenas de miles de empresas y despidos gracias a las líneas ICO. En ausencia de estas medidas, la desigualdad habría crecido un 80% en España en aquellos meses, golpeando más duramente a los colectivos más vulnerables, entre los que destaca el de los jóvenes.

Situaciones excepcionales como una guerra y una pandemia exigen medidas excepcionales y el Gobierno progresista no ha dudado en poner toda la potencia del Estado al servicio de la gente. Las políticas aprobadas en estos tres años (impuesto a las grandes fortunas, nuevos impuestos a empresas energéticas y bancos, rebajas fiscales a clases medias y trabajadoras, Ingreso Mínimo Vital, subida del SMI de 735 € a 1080 €, incremento de las pensiones no contributivas...) son la prueba de que se podían hacer las cosas de otra manera. De que esta vez el país no lo iban a sujetar en solitario las espaldas de los trabajadores, sino que se podían repartir las cargas.

En paralelo, la agenda reformista con la que los socialistas llegamos al gobierno ha seguido adelante. Gracias a los fondos europeos hemos podido hacer grandes avances en digitalización y transición ecológica. Mediante el diálogo social se ha devuelto el equilibrio a las relaciones entre empresas y sindicatos; y se ha mejorado nuestro mercado laboral, demostrando que la economía española puede

ser competitiva sin devaluar salarios ni condiciones laborales. Mientras cerramos esta edición del Informe Social, los sindicatos y el Gobierno han anunciado el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones con el fin de garantizar no solo su suficiencia, sino también su sostenibilidad. Finalmente, la actitud proactiva y bien guiada en Bruselas, hemos sido parte fundamental de las soluciones europeas a la crisis energética y hemos vuelto al lugar que nos correspondía como uno de los pilares de la Unión Europea. Frente a la devaluación salarial, la subida del SMI; frente al recorte de pensiones, adecuación al coste de la vida; frente a amnistías fiscales, justicia fiscal.

Había una alternativa. Se podía gobernar para proteger la economía real mientras se transforma el país para hacerlo más resiliente, productivo e inclusivo, la única manera de afrontar los cambios que atravesamos reduciendo la desigualdad.

EL COMBATE CONTRA LAS DESIGUALDADES SOCIALES SIGUE GUIÁNDONOS

La política es algo cuya utilidad se mide a través de su capacidad de cambiar la vida cotidiana de la gente para mejor. Una vida cotidiana que no está exenta de dificultades y que se manifiestan en más gente de la que pensamos. Según datos del INE, un tercio de los españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, un porcentaje muy similar al de quienes en los últimos estudios demoscópicos responden que les está costando llegar a fin de mes en el actual contexto inflacionario. Este hecho, que se proyecta sobre numerosas facetas de la vida diaria, hace que fenómenos que nos afectan a todos no lo hagan por igual. Durante la pandemia entendimos la importancia de tener un piso interior o exterior, de vivir en un piso o en un chalet o de tener o no un balcón al que asomarse y respirar. Y durante la última ola de calor entendimos cómo cambian las cosas cuando uno tiene aire acondicionado en casa o el margen de maniobra suficiente en el presupuesto del mes como para dejar encendido el ventilador un par de horas más al día. Como acertadamente señala David Lizoain en su artículo, la lucha contra el cambio climático es un imperativo porque sus costes no se repartirán igual, sino que recaerán sobre los más vulnerables. Esa es la realidad que está en la calle y es la realidad de la que nos hacemos cargo todos. Porque esas brechas en la sociedad se extienden a la vida presente y a lo que está por venir.

El informe que tenemos el honor de cerrar nos muestra que los empleos de más alta cualificación son los que más aumentan su peso dentro de la estructura ocupacional del país. Empleos con mejores salarios, mejores condiciones laborales y menos expuestos a eventuales vaivenes de la economía. Es decir, trabajos que dan a nuestras vidas la estabilidad que nos permite construir las como queramos. Cerrar la brecha entre formación y empleo, o la digital, son imperativos del hoy para construir el mañana que queremos como país. En esta edición del Informe Social, Xavier Martínez- Celorrio analiza de manera magistral cómo ha gestionado la derecha y la izquierda la política pública de Estado más importante para avanzar hacia una sociedad más igual: la educación. No en vano, en la educación está la llave para prevenir desigualdades presentes y futuras. Las transformaciones profundas de nuestra sociedad requieren tiempo, pero la ciudadanía debe saber que trabajamos sin descanso y que tenemos claro el rumbo.

El combate contra las actuales desigualdades y la prevención de las futuras son nuestras guías. La construcción de vivienda pública, el blindaje de un sistema de prestaciones estable, eficaz y eficiente, el desarrollo de una fiscalidad más justa, la mejora de las condiciones laborales, las políticas de inserción laboral plena en el empleo protegido (como expone Julio Martínez) y la promoción de un sistema educativo inclusivo y de calidad desde la primera infancia han de ser las herramientas que rompan este círculo de desventajas que hace que las cartas de muchos de nosotros ya estén marcadas al nacer. En el debate de la meritocracia de estos días es importante ser pedagógicos y, sin negar la importancia del tesón y el esfuerzo y personal, señalar que la desigualdad es un fenómeno estructural

con causas que van más allá de las actitudes de los individuos. Muy poco es casualidad en nuestras vidas y por eso debemos trabajar para tener las mayorías necesarias que nos permitan abordar las desigualdades eficazmente. Y el primer paso es siempre identificar y poner nombre al problema que queremos resolver.

LA IMPORTANCIA DE PONER NOMBRE A LAS COSAS

Como nos recuerda una de nuestras autoras, George Steiner decía que "lo que no se nombra, no existe". Hay que poner nombre a las situaciones de desigualdad, generar conocimiento alrededor de ellos para poderlos situar en la conversación pública del país y alertar de la existencia de un problema que reclama soluciones. Si la política es la búsqueda de soluciones estables a los desafíos de la vida en comunidad, resulta evidente que la comunidad debe ser parte de las soluciones junto con las instituciones que las hacen posibles. Por eso, en esta época de descrédito ciudadano de la política, rechazamos la idea de no politizar los problemas. Al contrario, creemos firmemente en la necesidad de hacerlo. Y para eso es crucial tejer redes de trabajo y movilización entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y los gobiernos e instituciones: una dinámica social que genere conocimiento, organización y activismo. Lo personal es político y el poder político, con sus limitaciones, acelera la transformación social, lleva las propuestas a políticas públicas, las hace tangibles, las lleva al BOE y a los presupuestos.

Veamos un ejemplo. Que en España solo el 17.8% de los profesionales STEM sean mujeres¹; y que tan solo el 0,7% de las adolescentes² estén interesadas en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales (frente al 7% de los hombres) es un problema para el país. Es un problema porque, como señala Michael Donaldson, estamos ante un cambio de época; ante una transformación de nuestra economía y sociedad que pivota sobre las tecnologías digitales. No formarse para un mercado laboral que demandará (que ya demanda) especialistas en tecnologías digitales nos expone a padecer mayores dificultades para obtener o mantener un empleo, con todo lo que eso conlleva. Este fenómeno no es algo que pase porque sí, no se explica por una mera acumulación de decisiones individuales de no aspirar a los empleos del mañana por parte de las jóvenes españolas. Por debajo de esa realidad subyace algo estructural, algo que a simple vista no se ve, pero que está ahí y a lo que hay que poner nombre: brecha digital de género. Las desigualdades de género, como señala Marisol Rojas, no son naturales y, por tanto, es posible revertirlas en todas y cada una de las realidades sociales en las que se despliegan.

Poner nombre a los problemas es el primer paso para comenzar a trabajar en el impulso de soluciones desde la política y las instituciones a partir de un diagnóstico compartido por todos. O casi todos.

LO PÚBLICO COMO RESPUESTA: EL REGRESO DEL ESTADO

Son numerosos los ejemplos de la importancia de que la izquierda dé la batalla de las ideas. Pero también los hay sobre lo que pasa cuando es la derecha la que sale triunfante del debate. Años hemos permitido que el neoliberalismo corroyera la idea de comunidad: "la sociedad no existe, solo los individuos". Y de pronto llegó una crisis financiera y el representante de la patronal pidió un paréntesis del capitalismo; y llegó una pandemia y los neoliberales se dieron cuenta de que el dinero que "el Estado no les robaba de los bolsillos" no les daba para costearse semanas de hospitalización por covid, sostener sus negocios o mantener sus propios ingresos personales tras ser incluidos en un

1 Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2023). Brecha digital de género 2023, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2023/060323-brecha-digital-genero2023.pdf>

2 Observatorio Social de La Caixa (2022). El ámbito de las STEM no atrae el talento femenino, <https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/el-ambito-de-las-stem-no-atrae-el-talento-femenino>

ERTE. De pronto todo el mundo miró al Estado. Y el Estado respondió.

La pandemia y la guerra han supuesto una sacudida no solo a nuestras vidas, sino también a nuestra forma de entender la sociedad. Planteamientos progresistas como la necesidad de unos servicios públicos sólidos o el papel del Estado en la economía recobran vigencia. El reto que ahora tenemos ante nosotros es cabalgar la ola para asentar una nueva forma de hacer las cosas y frenar a una ultraderecha y un populismo que, bajo una propaganda que reza que aspira a representar a las clases más desfavorecidas, quiere acabar con la democracia. Tenemos conocimiento del que partir: las contribuciones de este informe, junto al trabajo de numerosas economistas, expertas educativas, sanitarios o de las políticas sociales, nos muestran un camino para transformar nuestra sociedad. Y colectivos como las asociaciones sociales o las organizaciones sindicales nos reafirman en la importancia de lo público.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de construir un nuevo consenso político y social. Un nuevo sentido común construido desde posiciones progresistas compartido por el conjunto de los ciudadanos basado en la idea de lo público como respuesta. En que el Estado se involucre más en la consecución de los estándares de prosperidad y bienestar a los que todos tenemos derecho.

Empecemos por la prosperidad. Para nosotros, la prosperidad de España debe estar basada en el laborismo, en trabajos dignos y estables repartidos por todo el país. Porque nada construye tanto un país como que su gente tenga trabajos dignos creados por empresas vinculadas al territorio y que encuentren allí a sus trabajadores, formados en los empleos de hoy y de mañana. Y en la consecución de ese objetivo, el Estado debe jugar un papel más proactivo, por no decir protagonista. Pero, ¿cómo se hace esto?, ¿qué enfoque debemos dar a las políticas públicas?

Durante demasiados años hemos permitido que se asentara la idea de que el mercado es un mecanismo de creación y distribución de riqueza tan bueno que lo mejor que puede hacer el Estado es no hacer nada. O, como mucho, corregir a posteriori mediante impuestos y transferencias las consecuencias sobre los perdedores del mercado. Y ahí está el mito. Las mil espadas del Trono de Hierro. La historia que hemos escuchado tantas veces que ya se nos ha olvidado que es mentira. Porque la realidad es que los esfuerzos compensatorios del Estado no terminan de asegurar una reducción de la desigualdad. De hecho, algunos de los países con un mayor esfuerzo redistribuidor, como es el caso de Reino Unido, siguen padeciendo unos importantes niveles de desigualdad³. Resultan sintomáticas en ese sentido las palabras que el presidente de la patronal industrial británica, Tony Danker, pronunció en un discurso en 2021 tan duro como esclarecedor en el que decía, literalmente, “free market has failed”.

Frente a esto, la socialdemocracia debe apostar por la predistribución. Actuar sobre las causas de la desigualdad antes de que se manifiesten (fortaleciendo la posición sindical en las negociaciones laborales, fijando salarios mínimos, introduciendo el IMV, invirtiendo en educación, construyendo viviendas sociales...) y complementar esto con las políticas redistributivas que sean precisas. Por otro lado, la predistribución aspira a reorientar las prioridades del mercado generando incentivos. A que el Estado, el empresariado y los sindicatos se sienten en una mesa, determinen una estrategia industrial para España que aproveche todo lo bueno que tenemos (por ejemplo, unas óptimas condiciones climáticas y orográficas para el desarrollo de energías renovables), determinen qué puestos de trabajo habrá que cubrir de aquí a 5-10 años y diseñen los itinerarios educativos necesarios para garantizar rápidas pasarelas de la formación al empleo, para pasar del “diábolo” al “barril” que mencionaba en su artículo Eva Gajardo. Cerrar la brecha educación-empleo, generar riqueza distribuida por todo el territorio, reducir el desempleo (especialmente el juvenil) y cuidar el planeta. Todo en uno. Quienes

3 Cantó, O. (2019). *Desigualdad, redistribución y políticas públicas. ¿Hay una brecha generacional?* España ante el reto demográfico. Información Comercial Española. Revista de Economía, mayo-junio 2019. N.º 908, pp. 65-79

acusan a la izquierda de estar más a lo simbólico que a lo material, a las “grandes causas” antes que a “cosas del comer”, no hacen sino caer en una falacia. Si tenemos claro el camino, no tenemos por qué elegir.

Esto no es ninguna quimera: pensemos en el modelo vasco de clúster industrial, en vigor desde hace años. Pensemos en el modelo de colaboración público-privada que a nivel local, como describe Raquel Gil para la ciudad de Barcelona en este informe. Y pensemos en qué estamos haciendo con los fondos del programa Next Generation EU: 140.000 millones de euros para invertir en proyectos que trabajen en áreas y objetivos concretos fijados por el Estado y la UE. El Gobierno español tenía claro cuál debía ser el camino a seguir y por eso fue el primero en poner sobre la mesa de Bruselas un papel que circuló por todas las cancillerías europeas y terminó dando luz al Next Generation EU. En esta ocasión fue España la que propuso a Europa una solución a un problema común que demandaba una respuesta común. Y es que, una realidad cada vez más patente en las agendas nacionales de lucha contra la desigualdad es que la Unión Europea es la solución y que debemos trabajar en ella para que funcione aún mejor.

En la sociedad de hoy, incluso en una que parece estar en pleno retroceso de la ola globalizadora, los Estados-nación ya no son capaces por sí mismos de controlar y resolver todo lo que ocurre dentro de sus fronteras. Hoy nos enfrentamos a retos que tienen mucho que ver con el origen de la desigualdad social y que España, por sí sola, no puede resolver. Las reglas han cambiado, el terreno de juego también. En la impotencia ante los gigantes digitales, las deslocalizaciones industriales o las prácticas de evasión fiscal de las grandes empresas y patrimonios, los populismos de extrema derecha han encontrado un filón y lo están explotando. Esa “rabia ante la pérdida de prosperidad y el miedo al futuro” que dice Antón Costas, está siendo la gasolina de fenómenos como VOX, Meloni o el Brexit.

Para cabalgar la ola de las transformaciones que ya están aquí, la socialdemocracia necesita actualizar sus planteamientos económicos, de recaudación fiscal y de lucha contra la desigualdad. Y en ello estamos: España empuja desde hace años por lo que hace poco se ha conseguido: un acuerdo en la OCDE para fijar un Impuesto de Sociedades mínimo del 15% que entrará en vigor el próximo año. Este es un buen ejemplo de que España debe ser consciente de que su sitio en el mundo siempre pasará por trabajar por una mejor Europa. Que dotar al Estado del Bienestar de los recursos que necesita para funcionar pasa, ineludiblemente, por entender que la política europea no es política internacional y que trabajando en Bruselas trabajamos por el bienestar de los españoles.

LA POLÍTICA DE BIENESTAR ES POLÍTICA TERRITORIAL

Los servicios públicos tienen como finalidad la cobertura de aspectos centrales en el bienestar de los ciudadanos. Disponer de servicios sanitarios adecuados a los que acudir cuando se cae enfermo, de servicios educativos que garanticen la formación y la atención de calidad e igualadora a nuestros hijos desde su primer año de vida, o a cuidados cuando se pierde la capacidad de hacerlo por uno mismo son aspectos básicos de lo que actualmente entendemos por bienestar. Y lo que muchos buscamos, en palabras de Estrella Argüelles, es compartir adecuadamente las horas de cuidado entre la familia, la comunidad y los servicios públicos. Que se nos ayude a llegar allí donde las circunstancias de nuestra vida diaria hacen que no podamos llegar.

Como progresistas, nuestra responsabilidad es garantizar que estos servicios cuentan con los medios y el personal suficientes para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. No podemos dejar que los estándares de calidad de nuestra educación, nuestra sanidad o nuestros servicios sociales descansen sobre las espaldas de sus profesionales. Si les pedimos aún más de lo que ya dan, si lo fiamos todo a su vocación, estaremos creando las condiciones para que las costuras del sistema comiencen a saltar por donde no deben, por las personas. El síndrome del *burnout*, que tan acertadamente describe Oriol

Yugero en este informe social, no es sino la muestra más palpable, más social y más política de lo caros que han resultado ser los recortes de épocas pasadas.

La calidad de lo público es la principal garantía para prevenir desigualdades sociales y territoriales. Una constatación que nace de la naturaleza misma de nuestro sistema autonómico, en el que son las comunidades autónomas las encargadas de la planificación y la dotación de los servicios para hacer efectivos los derechos y su calidad, así como la gestión de las prestaciones sociales. En esencia, los gobiernos autonómicos, en coordinación con el gobierno central, son los responsables de grandes políticas de nuestro Estado del bienestar. Algo que quedó patente durante la pandemia en el despliegue del gran hito de la lucha contra esta, la campaña de vacunación.

La distribución de competencias dentro de nuestro modelo territorial obliga a establecer mecanismos de cooperación y coordinación que garanticen un elevado grado de cohesión en el conjunto del país, tanto en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos como en las prestaciones que reciben de estos. El modelo de cogobernanza, desplegado durante la pandemia por el Gobierno progresista, nos muestra un camino a profundizar. Un modelo basado en el autogobierno autonómico bajo la coordinación de un gobierno central que aliente el diálogo, no sólo con las diferentes autonomías, sino también de ellas entre sí (máxime en casos de continuidad territorial) para alumbrar una cartera de servicios públicos similar en todo el país dentro de un todo cohesionado. Tenemos que consolidar la dinámica de cooperación coordinada que ha demostrado funcionar en un contexto de emergencia nacional.

LA DERECHA Y LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Se trata, en definitiva, de asegurar el disfrute efectivo de derechos reconocidos por ley, de tal forma que se garantice la cohesión territorial y social. Una cohesión que sufre cuando en determinadas comunidades autónomas de nuestro país se divide a la sociedad en función de su capacidad económica. Lugares donde lo público se va degradando activa y pasivamente hasta provocar que importantes segmentos de la sociedad se pasen a lo privado en la búsqueda de la educación, la sanidad o el cuidado a la dependencia que merecen. Territorios en los que, al negar al sistema los recursos que necesita para funcionar, a golpe de populismo fiscal, se da la paradoja de que los ciudadanos terminan pagando un doble impuesto: el IRPF y el seguro médico (o la cuota del colegio concertado). Uno porque deben y otro porque no les queda más remedio. Y así se socava lo público generando un sistema dual en función del poder adquisitivo de cada individuo: quien puede pagarse ser atendido por el especialista en una semana y quien tiene que esperar meses porque no puede. Esta situación termina provocando un corrimiento de familias de clase media hacia lo privado, generando una espiral de presión creciente para más y más rebajas de impuestos. Porque, al fin y al cabo, si mis hijos van a un colegio concertado, si todos tenemos seguro médico y si no encuentro plazas en centros públicos de día y de mayores... ¿para qué pago impuestos?

Esta reflexión, que está en el núcleo de la cultura neoliberal que la derecha pretende implantar en toda España, que avanza en lugares como Andalucía y que ya está consolidada en la Comunidad de Madrid, encierra una profunda y peligrosa irresponsabilidad. Empujar a las clases medias no solo a abandonar, sino a denigrar lo público, solo lleva a la ruptura de la idea de comunidad. Por otro lado, la paulatina reducción de recursos y la consiguiente merma de calidad en lo público termina provocando una creciente desafección también de los estratos de menor renta de la sociedad. Estos, abocados a largas listas de espera, a que sus hijos se hacinen en clase con otras 35 personas o a no recibir ayuda para el cuidado de sus mayores, comienzan a dudar de que ellos se beneficien de la existencia de un Estado del bienestar que merezca la pena sostener. Y así, por una vía y otra, ante la percepción de estar pagando mucho para recibir poco, la degradación de lo público termina corroyendo la vida en comunidad, abriendo la puerta a un repliegue individualista. En palabras de Jorge Dioni, "olvidarse de

los vecinos nos lleva a la antipolítica desde la misma política”.

Esta es la propuesta política que la derecha está impulsando en España por la vía de los hechos. Y esta es la realidad ante la que los progresistas debemos ir a la batalla cultural, armados de nuestros mejores argumentos. En las redes sociales, en la prensa, en las tribunas parlamentarias y en informes académicos como este. Sigamos diciendo que el adelgazamiento de lo público para que unos pocos hagan negocio con los derechos de todos no es ni aceptable ni inteligente. Pues si algo nos han demostrado los últimos cuatro años es que no estamos a salvo de duras sacudidas de realidad, y que no podemos afrontarlas sin un Estado capaz de proteger y garantizar el bienestar y la prosperidad hasta de quienes no creen en él.

UNA REFLEXIÓN DE CIERRE

Un año de invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y las consecuencias de la pandemia de la covid-19 han acelerado los cambios que el anterior Informe Social apuntaba. Dos crisis encadenadas han hecho posibles transformaciones que nos parecían lejanas, casi imposibles. Son en momentos excepcionales cuando se dan las circunstancias para poder operarlas. Así podemos explicar la gran movilización de recursos públicos a nivel occidental para hacer frente a la covid, a la colaboración público-privada para hacer realidad una vacuna, a la centralidad de lo público, las intervenciones en el mercado o las grandes reformas que se han producido en el último año. Ante la incertidumbre, las administraciones públicas han actuado con firmeza para minimizar el impacto en la economía de familias y empresas.

Ante la actual situación, nos reafirmamos en la necesidad de un reformismo transformador que impulse un nuevo contrato social basado en un nuevo laborismo: la centralidad de las condiciones materiales de las personas, el reparto del trabajo, el trabajo para todos y todas, buenos empleos en una sociedad con un desarrollo inclusivo. En cada edición del Informe Social nos hacemos eco de una idea: allí donde la socialdemocracia gobierna y donde los acuerdos entre gobiernos, sindicatos de clase y empresarios son una constante, lo público se fortalece y el crecimiento se traduce en más igualdad de oportunidades y bienestar para todos. Y allí donde se reserva un rol minúsculo a lo público, se terminan provocando sociedades más desiguales, más frágiles y menos dueñas de su propio futuro.

Debemos seguir dando lugar a un crecimiento más justo, más dinámico, más estable y mejor repartido, así como garantizar una equidad en el disfrute efectivo de los derechos conquistados. Para eso necesitamos contar con un Estado fuerte, capaz de acompañar en las transiciones que ya están aquí, proteger y redistribuir; y que funcione de manera coordinada en la gestión de los servicios públicos. Lo público es un espacio de convivencia que relaciona a las instituciones con la sociedad, y a las organizaciones y ciudadanos entre sí. Recuperar su solidez no es solo una demanda ciudadana, sino también un imperativo para quienes creemos que la justicia social no es un eslogan.

Frente a derivas populistas y reaccionarias, el mejor antídoto es construir entre todos y todas seguridad y protección, así como una potente agenda de reformas que ofrezcan un futuro esperanzador y una convivencia anclada en un proyecto de sociedad compartido por todos. Para ello, vamos a seguir trabajando en fortalecer los espacios progresistas, en tejer grandes alianzas y nutrir un ecosistema de conocimiento y movilización del que salga ese nuevo sentido común. Un sentido común que hace poco uno de los fundadores del PSC en Girona nos interpelaba a fortalecer con la conciencia de clase, el conocimiento, la organización y la movilización que hace posible transformar la realidad, mejorar el bienestar de todos y el futuro de los que vengan.

El análisis de hoy puede convertirse en las propuestas de mañana y en las políticas públicas de pasado mañana. Sigamos creando y compartiendo conocimiento.